

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan sin novedad en esta Corte en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR NUM. 87.

En cumplimiento de lo mandado en Real orden de 26 de junio de 1858, inserta en el Boletín oficial de la provincia núm. 87 del mismo año, se ha señalado por la Dirección general de Obras públicas el día 1.º de Marzo próximo, para la apertura de los portazgos de la cuesta de San Marcos y de Villa de Rey, en la carretera de Madrid á Vigo, mandados establecer por dicha Real orden. Lo que se hace saber al público, por medio del Boletín oficial para los efectos que correspondan; y encargo muy particularmente á los Señores Alcaldes y demás autoridades locales respectivas, dispensen la protección necesaria á los encargados de la recaudación en dichos portazgos, al tenor de lo dispuesto en la Real orden de 6 de abril de 1855 publicada en la Gaceta núm. 100 del mismo año, que también se inserta á continuación para que nadie pueda alegar ignorancia.

Orense 4 de febrero de 1859.—El Gobernador, *Hermenegildo Guilian*.

OBRAS PÚBLICAS.

Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Gobernador de la provincia de Sevilla lo que sigue:

He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de un expediente remitido por el Ingeniero Jefe del distrito de Sevilla, instruido á consecuencia de reclamaciones del arrendatario del portazgo de Ecija, quejándose de las resoluciones adoptadas por la autoridad local en varias cuestiones que han ocurrido relativas á la exacción de derechos, con perjuicio de sus intereses legítimos.

Ent. rada S. M., y en vista de que no

se observan los procedimientos establecidos para la determinación de las dudas que se ofrezcan en la aplicación de los aranceles y demás disposiciones, referentes á los portazgos, originándose de esto complicaciones que dificultan y retardan notablemente la solución de aquellas y la consiguiente reparación del perjuicio que pueda haberse causado, bien á los transeúntes, bien á los arrendatarios, y en virtud de sus contratos á los fondos públicos, sobre qué han de gravar en su caso las indemnizaciones á que tengan derecho; se ha servido S. M. resolver que se guarde y cumpla estrictamente lo dispuesto por las Reales órdenes de 19 de febrero y 11 de abril de 1848, que atribuyen única y exclusivamente á la Dirección general de Obras públicas el adoptar ó proponer la resolución que corresponda en cualquiera duda que se suscite, relativa á la exacción de derechos de portazgos, con sujeción á lo que la misma tiene prevenido en circulares de 6 de junio de 1842 y 5 de diciembre de 1844, y lo prescrito por la nota 11 de los Aranceles para los casos de resistencia al pago, teniendo presente la aclaración de la misma nota dada en Real orden de 26 de agosto de 1846; y observándose también muy especialmente por las autoridades locales lo dispuesto en Reales órdenes de 9 de julio de 1842 y 6 de junio de 1843, así como en la de 3 de octubre del propio año, que tuvieron por objeto remediar la confusión y el desorden que introducía la práctica abusiva de hacer de la jurisdicción ordinaria cuestiones que por su índole especial corresponden exclusivamente á la administrativa.

Al propio tiempo ha tenido á bien mandar S. M. que haga V. S. efectiva respecto á la autoridad local de Ecija, la responsabilidad que impone á las de su clase la Real orden de 6 de junio de 1843, por falta de cumplimiento de la de 9 de julio de 1842 si volviese á separarse de lo que la misma prescribe, sin perjuicio de las reclamaciones que á todo interesado le convenga promover por el conducto y en la forma que corresponda, y sobre cada caso separadamente, con especificación de todas sus circunstancias.

De Real orden lo traslado á V. E. para su inteligencia, y á fin de que insertándose en la Gaceta la preinserta resolución, se observe como regla general aplicable á toda clase de portazgos, pontazgos y barcajes sin excepción alguna. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de abril de 1855.—Benavides.—Sr. Director general de Obras públicas.

CIRCULAR NUM. 88.

Habiendo desertado del presidio de la carretera de Vigo en la noche del 19 del actual los confinados Marcos Herrera Santiago, y Sergio Gonzalez Lozano, cuyas señas generales y personales abajo se expresan, encargo á los señores Alcaldes, Comandante de la Guardia civil y Comisario de vigilancia, procuren indagar su paradero; y conseguido que sea, ponerlos á disposición de este Gobierno con toda seguridad. Orense febrero 3 de 1859.—El Gobernador, *Hermenegildo Guilian*.

Señas del Marcos Herrera Santiago.

Hijo de Esteban y Teresa, natural de Torquemada, provincia de Palencia, vecindado en su pueblo, de estado soltero y de oficio zapatero, estatura 5 pies, edad 41 años, pelo y ojos negros, nariz regular, barba poblada, cara larga, color moreno; señas particulares pecoso de viruelas.

Idem del Sergio Gonzalez Lozano.

Hijo de Clemente y de Brigida, natural de Villaprovedo, partido de Saldaña, provincia de Palencia, vecindado en su pueblo, estado soltero y de oficio zapatero, estatura 5 pies, edad 55 años, pelo y ojos negros, nariz regular, barba id., cara consumida, color moreno.

Número 89.

Por la Dirección general de Gobierno en orden fecha 27 de enero último se me dice lo que sigue:

El Gobierno de las dos Sicilias ha dispuesto que los viajeros que se dirijan á aquel Reino vayan provistos de los correspondientes pasaportes visados por la Legación del mismo y refrendados por los Agentes consulares residentes en el primero y último puerto donde se embarquen antes de llegar al referido territorio, sin cuyos requisitos no le será permitida la entrada en él.

Lo comunico á V. S. á fin de

que se sirva dar publicidad á dicha disposición para que llegue á noticia de todos.

Lo que he dispuesto insertar en el periódico oficial de esta provincia á los efectos prevenidos por la referida Dirección. Orense 5 de febrero de 1859.—El Gobernador, *Hermenegildo Guilian*.

Número 90.

El Sr. Juez de Saldaña con fecha 22 del actual dirige á este Gobierno de provincia el exorto que sigue.

Don Venancio Gutierrez, doctor en jurisprudencia, consejero de provincia cesante, juez de paz de esta villa y encargado como tal del juzgado de primera instancia de la misma, por ausencia del señor juez nombrado en propiedad.—A V. S. Sr. Gobernador civil de la provincia de Orense, á quien saludo atentamente, participo: que por testimonio del que refrenda se instruye causa criminal en averiguación de quien diese muerte violenta á Pedro del Olmo, vecindado que estuvo en Villorquete, en la noche del 22 de diciembre último, y apareciendo iniciado en tal delito Benito Martin, natural de Santa Cruz del Monte, cuyas señas se expresarán en diligencia que el autuario pondrá á continuación, he mandado por auto de hoy entre otras cosas se exorte á V. S. para que se digne disponer que por los dependientes de su autoridad, destacamentos de la Guardia civil y carabineros establecidos en los límites de esa provincia, se practiquen las diligencias mas esquisitas, á fin de procurar la captura del indicado Benito y si se consiguiese será conducido con las mayores seguridades á este tribunal: para que tenga efecto lo acordado, en nombre de la Reina (que Dios guarde) requiero á V. S. y en el mio le ruego que recibiendo por el correo ordinario hoy sirvase aceptarlo y disponer se cumpla lo en el mandado, disponiendo así bien se digne acusarme recibo para que en la causa de que va hecha referencia, obre los efectos consiguientes; pues haciéndolo V. S. así administrará justicia y yo haré lo mismo siempre que vea sus comunicaciones, mediando ella.

Dado en Saldaña á 23 de enero de 1859.—Venancio Gutierrez.—Por mandado de S. S., *Benito Gutierrez Garcia*.

Diligencia. La pongo yo el escribano,

que las señas del fogado que contiene el anterior sorteo, son las siguientes:

Señas de Benito Martín.

Edad 28 años, 5 pies de estatura, pelo y ojos negros, estos algo abultados, nariz abultada, boca regular, color trigueño.

Troje.

Camisa de lienzo de este país, pantalón paño de Villanueva casero, a medio uso, chaleco negro de paño ordinario, chaqueta de igual paño a medio uso, faja morada, boteguines blancos, gorra de paño negro con visera. Y para que conste con referencia a la causa pongo la presente que se ha en Saldada dicho día 28 de enero de 1859.—Gutiérrez.

El que ha dispuesto insertar en el Boletín oficial de esta provincia para la debida publicidad, encargando al propio tiempo a los Señores Alcaldes, Comandante de la Guardia civil y Comisario de policía, procuren indagar el paradero del referido Martín, y en caso de ser habido, entregarlo con toda seguridad a este Gobierno. Orense febrero 4 de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guítan.

Número 91.

En la Gaceta de Madrid número 29 del sábado 29 de enero último se publica lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GUERRA.

REALES DECRETOS.

Vengo en resolver que D. José Nieulant y Sanchez Pleitès, Marqués de Villamayna, Coronel graduado primer Comandante de infantería y Capitán de artillería, cese en el cargo de Ayudante de órdenes del Rey mi augusto Esposo, quedando muy satisfecho de la lealtad y celo con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio a 28 de enero de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Guerra, Leopoldo O'Donnell.

Vengo en nombrar Ayudante de órdenes del Rey mi augusto Esposo al Coronel del regimiento infantería de Málaga Don Fernando Cuadros y Jimeno, en la vacante que ha resultado por cesación del Coronel graduado Don José Nieulant y Sanchez Pleitès, Marqués de Villamayna.

Dado en Palacio a 28 de enero de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Guerra.—Leopoldo O'Donnell.

MINISTERIO DE ESTADO.

Dirección política.

Existente en la Caja general de Depósitos la cantidad que a priori debe entregarse a los propietarios en el casco y cargamento de los barcos bombardeos San Antonio, Jabque Virgen de los Angeles, bergantín Nuestra Señora del Carmen y la Fortuna, de la matrícula de Barcelona el primero, de la de San Feliu de Gispert el segundo, y de la de Mahon los dos últimos; bienes que, mandados por los Capitanes Jerónimo Campodonico, Benito Sarrá, José R. y Francisco Piñero apresados en 1811, y en 1812 por corsarios de Tripoli, se llama nuevamente a los mismos propietarios para que en el plazo de seis meses acudan a deducir sus derechos en la primera Secretaría de Estado, donde deberán presentar para enjuiciamiento si lo creyeran convenientes. Igualmente se cita entre ellos más

especialmente a D. Jerónimo Villanova, D. Rafael Sarrá y Tomas Mateu, quienes, según parece, podrían alegar derecho a la propiedad del Jabque Virgen de los Angeles.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 7 de febrero de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guítan.

Número 92.

En la Gaceta de Madrid número 31 del domingo 30 de enero último se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE HACIENDA.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española Reina de las Españas; A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza al Gobierno para que desde el día 1.º de enero, y hasta que sean votados por las Cortes los presupuestos generales del Estado para el año de 1859, recaude e invierta las contribuciones, rentas públicas y demás recursos con arreglo al proyecto de ley de los mismos presupuestos, que ha sometido a la aprobación de aquellas, sin perjuicio de las alteraciones que creyese conveniente hacer al examinarlos y discutirlos. Los gastos comprendidos en dichos presupuestos a que se refiere el proyecto de ley para atender a la mejora y fomento del material extraordinario de todos los servicios, se ajustarán, tanto se discute este proyecto, a las cantidades señaladas en los presupuestos de 1858.

Por tanto, mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Palacio a 29 de enero de 1859.—YO LA REINA.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverria.

REAL DECRETO.

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Director general de Aduanas y Aranceles ha hecho D. Lorenzo Nicolas Quintana, declarándole cesante con el haber que por clasificación le corresponda. Dado en Palacio a 29 de enero de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverria.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 7 de febrero de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guítan.

Número 93.

En la Gaceta de Madrid número 318 del martes 14 de diciembre próximo pasado se lee lo siguiente:

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid a 10 de diciembre de 1853, en el pleito seguido en el Juzgado de primera instancia de Bribiesca y en la Sala primera de la Real Audiencia de Burgos entre la Abadesa del Real monasterio de las Huelgas, Gertrudis de aquella ciudad, y el Ayuntamiento del lugar de Valdazo, sobre reconocimiento y pago de un censo pendiente ante Nos en virtud de recurso de casación deducida por el monasterio contra la sentencia dictada por la referida Sala, resultando que por privilegio de los

Señores Reyes Católicos, a 21 de octubre de 1477, se confirmó a dicho Real monasterio las concesiones hechas por los Reyes anteriores, para su dotación de ciertas villas, señorios y vasallos, entre ellos los de Valdazo, y de algunas rentas y franquizas, especialmente de la cobranza por sí de todos los servicios, pedidos, moneda, moneda forera y de todo otro pecho de Rey, aforado o no aforado, que correspondiera pagar a dichos pueblos y vasallos.

Resultando que esta Real confirmación obtuvo por posterior de los mismos Señores Reyes Católicos en 18 de agosto de 1477 y 28 de octubre de 1495.

Resultando que habiendo seguido pleito dicho Real monasterio con el Procurador fiscal sobre cumplimiento de los citados privilegios, recayó ejecutoria en 28 de noviembre de 1522, por la que se ampliaron, guardando a conciencia de que devolviendo al Rey los mayores sesos que por su concesión recibieran los Reyes Católicos, pudiera revocarlo y dejar sin efecto.

Resultando que el Ayuntamiento, Concejo y vecinos del lugar de Valdazo y el Real monasterio de las Huelgas otorgaron en 21 de abril de 1612 escritura, por la cual, atendiendo a que este había percibido anualmente 10 y media fanegas de trigo por renta y censo de cierto señorío, infurciones y derechos antiguos que tenía sobre aquel Concejo y vecinos, y sobre los prados, heredamientos y egidos concejiles, cuya escritura de imposición no parecía por su antigüedad, con cuyo motivo no había hecho el pago de la pensión dicho Concejo en los últimos seis años, pero que sabían la existencia del gravamen, aunque no había claridad y distinción por tradición y memoria de cien años y por pagas continuas de más de 50; y habiéndose convenido dicho Real monasterio en reducir a seis y media fanegas anuales de trigo el censo, se reconocían reales dueños de él, por sí y por los que les sucediesen en la habilitación y vecindad, y en el goce de sus pastos comunes, aguas y usufructo de sus bienes concejiles, tomando de nuevo, en caso necesario, sobre sí y sus bienes, e hipotecando al cumplimiento los mismos prados, heredamientos y egidos de que dicho censo provenía, por haberlos dado el monasterio al Concejo, de los que conservaría aquel el dominio directo y este el útil; habiéndose tomado razón de esta escritura en la Contaduría de hipotecas de Bribiesca en 19 de agosto de 1775.

Resultando que con presentación de esta escritura acudió el monasterio en 21 de noviembre de 1856 al Juzgado de primera instancia de Bribiesca, poniendo demanda para que se condenara al Concejo y vecinos de Valdazo a reconocer de nuevo el susodicho censo enfiteutico, a que hicieran apeo y anticipo de las fincas en que estaba constituido, y al pago de las pensiones vencidas desde 1853, y al de las que se venceran en adelante.

Resultando que el Ayuntamiento y vecinos de Valdazo contestaron la precedente demanda pidiendo se les absolviera de ella.

Resultando que recibido el pleito a prueba, la practicaron ambos litigantes a su respectivo propósito de justificar el monasterio, que el censo provenía de señorío territorial, y el Ayuntamiento, que del jurisdiccional que aquel había ejercido.

Resultando que el Juez de primera instancia de Bribiesca dio sentencia en 13 de mayo de 1857, absolviendo al Ayuntamiento y vecinos de Valdazo de la demanda del monasterio, la cual confirmó la Sala primera de la Real Audiencia de Burgos por la suya de 12 de enero de este año.

Resultando que contra esta se ha interpuesto el presente recurso de casación, fundado en ser contraria a la

ley relativa a la exactitud con que deben cumplirse los contratos, en particular los de censos, cuya responsabilidad tienen reconocida los censatarios, como sucede con el Ayuntamiento y vecinos de Valdazo, según la escritura de 21 de abril de 1642, cuyo valor se desconoce; y en que por ella se han infringido los artículos 5.º y 6.º del decreto de las Cortes de 6 de agosto de 1811, el segundo de la ley de 26 de agosto de 1857, como también la ley 6.ª, título 5.º, libro 5.º de la Novísima Recopilación, en que se ordena no deba entenderse concedido el señorío jurisdiccional sino cuando en las cartas y concesiones de los Reyes se exprese así.

Visto: siendo Ponente el Ministro Don Miguel Osca:

Considerando que las leyes 5.ª, título 11, Partida 1.ª, y la 28, título 3.º, Partida 5.ª, prescriben terminantemente que para ser valedera y eficaz la constitución de la enfiteusis debe otorgarse escritura pública del contrato, y que este requisito esencial no consta se llenase cuando se celebró, según se dice, el que ha sido objeto de este pleito.

Considerando que aun cuando sean admisibles algunas pruebas supletorias en defecto de la escritura de celebración del contrato, enfiteutico, por haber desaparecido esta, siempre obligado el dueño directo a justificar la identidad del predio o predios censados, y que el monasterio ha descuidado completamente esta justificación, ignorándose en su consecuencia cuales sean, no obstante de haber negado el reconvenido poseerlos y de ser una de las pretensiones contenidas en la demanda su reconocimiento y deslinde.

Considerando que en la escritura de reconocimiento del censo de que se trata se dice, que correspondía al monasterio por razón de cierto señorío, infurciones, derechos antiguos que tenía sobre el Concejo y vecinos de Valdazo, así como sobre los prados, heredamientos y egidos concejiles; y que habiéndose expresado en los privilegios de los señores Reyes Católicos, que se daba al monasterio el señorío y vasallos &c, de dicho lugar, no puede menos de reconocerse que la prestación reclamada debe su origen a título, si no jurisdiccional, feudal, y que, tanto en un caso como en otro, ha sido abolida por el artículo 1.º de la ley de 5 de mayo de 1823.

Considerando que la sentencia contra la cual se ha interpuesto el recurso deja intacto el principio de la religión con que deben guardarse los pactos, porque estimada la insubsistencia de estos, no cabe su aplicación, sin que tampoco pueda convenirse en que se haya desconocido el valor legal de la escritura de reconocimiento del censo, sino que ha debido apreciarse juntamente con la demás resistencia de autos, sin olvidar las disposiciones de las leyes vigentes sobre la materia, cuyos elementos producen un efecto contrario a la intención de la parte recurrente.

Considerando que tampoco se han infringido los artículos 5.º y 6.º del decreto de las Cortes de 6 de agosto de 1811, ni el 2.º de la ley de 26 de agosto de 1857, como que el fallo está ajustado en su caso a lo prescrito, terminantemente en el 1.º de la ley de 5 de mayo de 1823, que siendo aclaratoria del citado decreto de 1811, nada podía contener este contrato, al pago que, por la del año de 1857 no fue derogado su art. 5.º, respecto a las prestaciones que abolio.

Considerando, por último, que dicha sentencia no afecta a la ley 6.ª, título 5.º, libro 5.º de la Novísima Recopilación, pues que, independientemente de ella, procedía la absolución de la demanda, ora que, prescindiendo de los derechos señoriales, se determinase el pleito por las leyes comunes, ora en consideración a los mismos, por las especiales de señorios, según queda manifestado:

Por lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 7 de febrero de 1859. El Gobernador, Hermenegildo Guillan.

En la villa y corte de Madrid, a 15 de diciembre de 1858, en los autos que sigue Don Joaquín José Llorens con D. Nicolás Moreno, como marido de Doña Josefa Perez, sobre que se declara al primero inmediato sucesor al vínculo fundado por Don Antonio Miguel Chiva y otros extremos consiguientes que después se referirán; autos pendientes ante Nos por recurso de nulidad que interpuso Moreno contra la sentencia de revista pronunciada por la Sala primera de la Real Audiencia de Zaragoza.

Resultando que dicho D. Antonio otorgó testamento en Puerto Mingallo a 21 de diciembre de 1696, en el que después de dejar por legítima herencia de todos sus bienes a su hijo D. Miguel, presbítero y a su nieto D. Pedro, hijo de Don Juan, y a otros en adelante que tuviesen derecho a sus indicados bienes, a cada uno de ellos cinco sueldos por los muebles y dos arrobas de tierra por los sitios, dijo que instituyó un vínculo gradual y sucesivo, a cuya obtención llamaba en primer lugar al referido su nieto D. Pedro, y por la muerte de este a los hijos y descendientes del mismo, procediendo al legítimo matrimonio con preferencia de mayor a menor, y de varón a hembra, designando para la vinculación diferentes bienes, entre ellos dos masadas denominadas la una el Mas Blanco y la otra el Mas del Portillo, los que expresamente habiendo al mencionado su hijo D. Juan al contrer matrimonio con Doña Antonia Navarro, con pacto y condición de que hubieran de quedar sujetas a la disposición testamentaria del otorgante, como por este testamento ordenaba, que quedasen comprendidas en el vínculo.

Resultando que en otras cláusulas del mismo testamento dispuso que todos los sucesores en el vínculo habían de ser y aprobar aquél y esta, quedando privado de todo derecho el que no lo verificase, que si alguno de dichos sucesores cometiese delito de lesa Majestad divina o humana, u otros, por el cual incurriera o se le pudiera condenar a confiscación de bienes, lo pudiese un mes antes de cometer

lo del dominio y posesión de los del vínculo, pasando al siguiente en grado; que en atención a haber muerto dicho su hijo Don Juan dejando al indicado nieto del testador, llamado D. Pedro, en la edad de siete años, poco más o menos, y bajo la tutela del referido presbítero D. Miguel rigiese y usufructuase este los bienes indicados hasta que el D. Pedro tomara estado de matrimonio, excepto de las cosas en que vivía el testador y de las dos referidas masadas, mediante haber sido ofrecidos al propio hijo D. Juan en sus capitulaciones matrimoniales con la Navarro, y haber quedado en usufructuario de ellas manteniéndose viudo, y que cumplido lo que dejaba dispuesto, de los restantes bienes instituya heredero de la mitad a dicho su hijo el presbítero, queriendo que por muerte de este pasase con la otra mitad al nieto D. Pedro.

Resultando, en efecto, de dichas capitulaciones otorgadas en 26 de marzo de 1681 para el matrimonio que había de contraer el D. Juan con la Navarro, que el padre del contrayente dió y mandó a este aquellas dos masadas; habiéndose pactado en las mismas capitulaciones que por aumento de dote se diese el referido Mas Blanco a la Navarro, con tal que si tuviera hijos de aquel matrimonio pudiera disponer de dicha finca entre estos en ciertos casos que se expresan.

Resultando, según una copia autorizada presentada en autos, que el mismo testador otorgó un codicilo en 18 de marzo de 1705, en el que, recordando el testamento y expresando que tuviese efecto lo ordenado en el mismo, excepto lo que variase por el codicilo, dispuso en este la revocación, extinción, casación y anulación del vínculo, queriendo que se tuviera por no hecho ni ordenado, y que se considerasen libres los bienes con que se le había dotado; nombró heredero universal al mencionado presbítero D. Miguel, quien había de disponer de dicha universal herencia a favor del nieto D. Pedro, queriendo asimismo que si aquel muriera sin disposición testamentaria, recayesen los bienes de aquella herencia en el D. Pedro a libre disposición del mismo; y previno además que el matrimonio de D. Pedro fuese a voluntad del referido presbítero, y que en tal caso este diese a aquel de la mencionada herencia lo que bien visto le fuese.

Resultando que en 21 de enero de 1712 y en 8 de septiembre de 1719 se otorgaron capitulaciones para los dos matrimonios que contraía el expresado D. Pedro, apareciendo de las primeras que su referido tío el presbítero le dió y mandó, entre otras cosas, algunas que por sus nombres convienen con varias de las designadas para la fundación en el testamento de 1696, si bien en los linderos no hay una absoluta identidad; llevando el D. Pedro, como bienes propios suyos, el Mas Blanco y el del Portillo, y de las segundas, que además de aportar el D. Pedro al matrimonio, se refieren a los bienes que le pertenecían por dicha escritura matrimonial anterior, le mandó el propio presbítero su tío otra finca, la cual conforme a los linderos para la fundación, no lo está en los linderos.

Resultando que D. Joaquín Chiva, hijo del D. Pedro, otorgó escritura en dicha villa de Puerto Mingallo a 12 de agosto de 1745, cuando aprobando y confirmando en cumplimiento de lo ordenado por su bisabuelo el D. Antonio, la disposición testamentaria y vínculo de este con todos sus pagos y cláusulas.

Resultando que el mismo D. Joaquín y su mujer Doña Antonia Domenech, deslaron en la propia villa a 27 de enero de 1679, nombrándose mutuamente herederos usufructuarios, disponiendo además que, fenecido el usufructo del que sobreviviera al otro, fuese su universal heredero el hijo de ambos, D. Francisco Mariana Chiva, y por muerte de éste los hijos del mismo, por orden de primogenitura; que si el D. Francisco muriese sin sucesión, fuese

heredera universal de los otorgantes la hija de los mismos Doña Gertrudis Chiva, y por fallecimiento de esta sus hijas varones, prefiriendo el mayor al menor y a falta de varones las hembras con la misma preferencia; que si los dos referidos Doña Francisco y Doña Gertrudis muriesen sin sucesión, se estuviese a lo dispuesto por los causantes y antepasados de los otorgantes por quienes les habían venido los bienes, y que si en cuanto a alguno de ellos no se hallasen disposiciones, se quedasen, pasasen los bienes a donde fuese justo, según ley cristiana de aquel reino de Aragón.

Resultando que a 9 de agosto de 1776 se otorgaron en Alcorisa capitulaciones para el matrimonio del referido D. Francisco con Doña Antonia Ballester, en las que se dieron a este por su padre dicha Doña Joaquín Chiva, para después de sus días y los de su causante, entre otros bienes, el Mas Blanco y el del Portillo, cuyos linderos se refieren y no están conformes en toda con los que a las fincas de esos nombres se les atribuyeron en la fundación, ni el Mas Blanco aparece si o en la misma partida; pactándose en dichas capitulaciones que sobre todos los bienes mandados al D. Francisco se habían de dar y asegurar a la Doña Antonia 1,500 libras valencianas en arras y aumento de dote; que a la muerte del D. Francisco, sin hijos, los bienes que le iban mandados debían, sin perjuicio de la viudez del padre, recaer en sus padres si vivían, y si a la sazón hubiesen muerto, en D. Mateo Chiva los que fuesen de la ascendencia y casa de los Chivas, pasando desde luego los que fuesen de la de Domenech a Don Mariano García Chiva, hijo de D. Joaquín García y de Doña Gertrudis Chiva, hermana de D. Francisco; que fenecida la vida del D. Mateo, usufructuario de los bienes de la casa de los Chivas, estos recayesen igualmente en el D. Mariano, y que si este muriese sin sucesión, de dichos bienes recayesen los vinculados en aquella persona o personas a las que perteneciesen, según los llamamientos de las vinculaciones, y los no vinculados en las que debían recaer según las disposiciones forales del reino de Aragón.

Resultando que dicho D. Mariano testó a la edad de 11 años en Rubielos a 2 de octubre de 1788, expresando que en atención a ser justo y muy conforme a lo que se había entendido en las capitulaciones para el matrimonio de sus padres el D. Joaquín García y la Doña Gertrudis que los bienes que esta, ya difunta, al tiempo del testamento de que se va hablando, había llevado a dicho matrimonio, volvieran al tronco y casa de donde emanaban, era su voluntad que todos los bienes y derechos que hubiesen salido de la casa de dicha su madre, como también todos los en que él había sucedido y sucediere por el mismo motivo y origen, volvieran al D. Francisco María Chiva, su tío, y por su muerte a su habiente derecho que por cuanto podía suceder que dicha su tía muriese antes que él, quería que en tal caso los habientes derecho de aquel sucediesen en la parte que le legaba por vía de memoria, remuneración y agradecimiento, debiendo ser el destino de la otra parte a voluntad de su padre y referido tío; que sin perjuicio de los llamamientos que tenía declarados a favor del último, y sus habientes derecho en su caso, de todos los demás bienes nombrados heredero universal a dicho su padre, y que ordenaba que ninguna otra disposición testamentaria, donación, remuneración, sucesión, contraria a la sucesión y llamamientos referidos de los indicados bienes tuviera valor, aunque la hiciese, a menos que mencionase individualmente en ellas esta disposición testamentaria.

Resultando que en 13 de abril de 1801 se otorgaron capitulaciones para el matrimonio que iba a contraer el D. Mariano García Chiva, con su primera mujer Doña Mariana Ferrer, en las que intervinieron dos tíos del contrayente, a saber: el

Don Francisco y otro, y la madre de la Ferrer, los que mandaron diferentes bienes a sus respectivos sobrinos e hijas, llamándose entre los que el D. Francisco desde entonces y para después de sus días mandó al D. Mariano el Mas Blanco, libre e indemne de toda carga y obligación; dirigiéndose además en estas capitulaciones, que para el caso de que el Don Francisco muriera sin sucesión, llevaba el Don Mariano los dos vínculos que poseía el mismo su tío D. Francisco de Chiva y Domenech, los que por derecho le pertenecían en tal caso; y pactándose que si se disolvía el matrimonio sin hijos, los bienes que iban mandados por una y otra parte volvieran a sus respectivos mandantes o a sus habientes derecho.

Resultando que el D. Francisco, en su disposición testamentaria de 8 de abril de 1801, instituyó por su heredero universal a su sobrino el D. Mariano.

Resultando que este, además del testamento de 1788, otorgó otros dos en Valencia, el uno en 1824 y el otro en 1829, de los que en el primero nombró por su heredero universal a dicha su primera mujer, la Ferrer, y en el segundo, hallándose ya viudo de esta, a una sobrina; y si bien en el de 1821 revocó el de 1788, y en el de 1829 los otros dos, al hacer en ambas revocaciones mérito del de 1788, nombró como notario autorizante de él otro que él que aparece haberlo sido.

Resultando que el mismo D. Mariano casado en segundas nupcias con la Doña Josefa Perez, indicada al principio, otorgó otro testamento en Valencia a 1.º de agosto de 1837, en el que instituyó por su universal heredera a dicha su segunda mujer, revocando en general todos los testamentos y codicilos que antes hubiese otorgado.

Resultando que fallecido el D. Mariano al día siguiente de otorgar el testamento de que se acaba de hablar, acudió Don Joaquín José Llorens en 28 de mayo de 1851 al Juzgado de primera instancia de Mora, con escrito en el que hizo mérito de un testamento otorgado por Don Juan Molés en 1677, y del de Don Antonio Miguel Chiva de 1696, cuyos testimonios acompañó, sosteniendo haberse instituido en ellos dos vínculos, alegando, en cuanto al de Molés, del que hoy no se trata, lo que estimó conveniente; diciendo que el de Chiva era de sucesión regular y el inmediato sucesor al mismo como descendiente del fundador y primo segundo del último poseedor el D. Mariano, por lo cual le correspondía la mitad de los bienes de su dotación; y terminando con la solicitud de que se le declarara inmediato sucesor a ambos, y se le pusiera en posesión de la mitad de sus bienes, con entrega, por quien correspondiese, de los frutos y rentas producidos y podidos producir por dicha mitad desde el fallecimiento del último poseedor, y con reserva de su derecho a la otra mitad y a sus frutos.

Resultando que convocados por edictos los que se creyeron con derecho, compareció D. Nicolás Moreno, como marido de la Perez, pretendiendo que se desestimase la solicitud de Llorens y se le condenase a perpetuo silencio; para lo cual presentó varios documentos, entre ellos el codicilo de 1705, alegando, en cuanto al vínculo de Chiva, que por el codicilo había quedado revocado y anulada la fundación de 1696 y pasado los bienes de esta como libres a los sucesores del instituidor, habiendo dispuesto varios de los herederos de los bienes de los Chivas de diferentes fincas de las incluidas en la fundación, y que las restantes habían sido poseídas legítimamente por el D. Mariano hasta su muerte en virtud de algunos de los indicados documentos que acompañó a este escrito, y por fallecimiento del D. Mariano, dejando heredera universal a dicha Perez, correspondían a la misma.

Resultando que después en el curso de los autos alegó además Moreno contra la solicitud de Llorens, que éste había ser-

vido en la facción desde 1834, como que por est: razón se le habían secuestrado los bienes, é incurrido en el delito de lesa Magestad humana, quedando por lo tanto privado del derecho a la vinculación según lo dispuesto en el particular por el fundador:

Resultando que mediante la oposición de Moreno citó Llorens su reclamación contra él para que como detentador de los bienes le entregase los frutos y rentas reclamados, y se pusieron á su instancia testimonios de dos Reales órdenes expedidas en 1818, por la una de las cuales se le devolvieron los bienes y rentas que se le habían secuestrado, y por la otra fué destinado como Brigadier á las inmediatas órdenes del Capitan general de Valencia; alegando además haber sido comprendido en la amnistia dada por S. M., y no indultado:

Resultando que, seguidos los autos y recibidos á prueba, por parte de Llorens, que dijo tener motivos para suponer apócrifo el codicilo de 1705, se intentó la del cotejo de la extracta ó copia de ese instrumento que obraba en autos, diligencia que no pudo verificarse por no haberse hallado el protocolo del Escribano que lo autorizó, respectivo al mencionado año; y las pruebas practicadas por Moreno se dirigieron á justificar las enajenaciones que tenía indicadas de diferentes fincas de las que se designaron para el vínculo en el testamento de 1696, y que se habían impuesto gravámenes sobre algunas de estas:

Resultando que en la sentencia definitiva que recayó en 20 de agosto de 1853 se declaró que eran válidas y subsistentes ambas vinculaciones hasta la promulgación de la ley de desvinculación vigente, y á Llorens inmediato sucesor, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, se mandó, en su consecuencia, que se le pusiera en posesión de la mitad íntegra de los bienes que constitúan dichas vinculaciones; que Moreno, en la calidad que litigaba, entregase á aquel los frutos y rentas producidos por ambas mitades desde 2 de agosto de 1837; salvo aquellos que la Perez, en calidad de viuda del Don Mariano Garcia Chiva, habia percibido mientras lo habia sido legitimamente por estarle señalados en las fundaciones; y se reservó á Llorens el derecho que creyera asistirle á las otras dos mitades restantes y sus frutos:

Resultando que interpuesta apelación por Moreno y sustanciada la segunda instancia en la Sala tercera de la expresada Audiencia, habiéndose suministrado pruebas por ambas partes, dictaron sentencia el Presidente y tres Magistrados de aquella Sala en 17 de noviembre de 1855, en la que declararon que habia existido la vinculación de Molés hasta la promulgación de la ley de 30 de agosto de 1836, y que á Llorens le pertenecía en propiedad la mitad de los bienes de ella con los frutos y rentas producidos desde el 3 de agosto de 1837, salvo aquellos que la Perez hubiese percibido con la calidad de viuda del D. Mariano Garcia Chiva, y remitieron el pleito en discordia respecto á si habia existido ó no el mayorazgo fundado por D. Antonio Miguel Chiva:

Resultando que vistos los autos, por los tres Magistrados que se nombraron para dirimir la discordia, recayó sentencia en 12 de diciembre del mismo año de 1855, acerca del punto discordado, por lo que se declaró que la expresada vinculación de Chiva habia sido revocada por el codicilo de 1705, hallándose por consiguiente los bienes en la clase de libres, y que en su consecuencia se absolvía á Moreno de la demanda de Llorens:

Resultando que interpuesta súplica por Moreno de la sentencia de 17 de noviembre y por Llorens de la de 12 de diciembre, se sustanció la tercera instancia, practicándose también pruebas por ambas partes, y la Sala primera, formada por tres Magistrados, dictó sentencia en 24 de octubre de 1857, por la que se confir-

mó la de vista relativa al vínculo de Molés, y suplicado y enmendando la otra también de vista respectiva al de Chiva, se declaró válida y subsistente la vinculación de 1696 hasta la promulgación de la ley de desvinculación vigente, y que en su consecuencia la mitad de los bienes que la compusieron correspondia en propiedad y dominio á Llorens como inmediato sucesor, con los frutos y rentas producidos desde el fallecimiento del último poseedor, á excepción de aquellos que hubiese percibido la Perez en concepto de viuda del Don Mariano Garcia Chiva:

Resultando que contra esta sentencia se interpuso por Moreno el recurso de nulidad hoy pendiente, en el que alegó que, además de ser doctrina corriente entre los juriconsultos, aun bajo los principios de otras legislaciones que la aragonesa, la de que un documento que cuenta mas de 110 años hace fe en juicio, sin necesidad de que esté comprobado, habiéndose de resolver la cuestión por la indicada legislación aragonesa, y siendo incontestable, según la observancia 24 de *fide instrumentorum*, que forma parte del derecho aragonés, que la extracta presentada del codicilo, á la que ningún otro defecto se le habia opuesto que la falta del cotejo, tenia suficiente valor en sí misma para hacer fe por sí sola, aunque no se hubiese podido cotejar por la desaparición del protocolo, si la sentencia habia prescindido del codicilo como no existente ó como falso, por no haberse cotejado, era contraria á la ley clara y terminante, cual lo era esa observancia:

Que era preciso recordar que se tenia por doctrina en Aragon la de que podía darse y quitarse la herencia lo mismo en testamento que en codicilo, puesto que allí el uno y el otro se otorgaban con las mismas formalidades, y que tal doctrina, además de ser muy conforme con los fueros y observancias, así como lo era con la razón y equidad natural á que habia que acudir á falta de fuero, según el proemio primero de estos, se hallaba sancionada por la costumbre general de aquel reino que formaba también parte del derecho aragonés, según el *Privilegium generale Aragonum*, libro primero de los fueros, versículo *Item* del mero Imperio; de modo que si la sentencia al dar validez al testamento habia procedido en el supuesto de no poderse derogar el testamento por el codicilo, habia infringido dicha doctrina legal sancionada por la costumbre:

Que al dar validez á la vinculación se habia fallado á lo establecido en el fuero único y observancia primera de *rebus vincutatis* y sexto de *testamentis*, puesto que en el testamento de 1696 no se dejaba por el testador al hijo y al nieto mas que lo que rutinariamente calificaran los Escribanos de legitima, contra varias decisiones de aquella Audiencia que se citaron, y en la escritura de locación de 1745 que Llorens sostenia que debia producir los efectos de una fundación nueva no se asignaba ninguna legitima á los hijos del otorgante:

Que suponiendo existente la vinculación, habia otra nulidad en haberse declarado con derecho á ella á Llorens, excluido de la sucesión, según la ley 1.ª título 2.º, Partida 7.ª, y la 1.ª, título 7.º, libro 12 de la Novísima Recopilación:

Que en cuanto á los frutos la sentencia era contraria á lo prevenido en la ley 39, título 28, Partida 3.ª y á otras concordantes, y á la jurisprudencia de los Tribunales en casos semejantes:

Y por último, que siendo conformes con respecto al vínculo de Molés la sentencia del Juzgado y la primera de las de vista, habia debido intervenir mayor número de Magistrados en la de revista, semero de Magistrados en la de revista, según el art. 285 de la Constitución de 1812 vigente por la ley de 16 de setiembre de 1837:

Vi-tos; siendo ponente el Ministro Don Ramon Maria de Arriola:

Considerando que D. Antonio Miguel

Chiva, al fundar en su testamento de 24 de diciembre de 1696 el vínculo conovido por la denominación de Chiva, asignándole diferentes bienes de su propiedad y haciendo los llamamientos que tuvo por conveniente, usó de un derecho indisputable, sin que la perpetuidad de dicho vínculo obstase el fuero único ni la observancia primera de *rebus vincutatis* del derecho de Aragon, mediante que el fundador dejó á sus descendientes parte de sus bienes en la legitima foral:

Considerando que no puede darse valor en juicio á la copia autorizada del codicilo que se dice otorgado por el mismo fundador, por no haberse probado legalmente su existencia, como lo debia haber hecho D. Nicolas Moreno; pues si bien la observancia 24 del título de *fide instrumentorum* establece que no se tenga por falso un instrumento por la única razón de no encontrarse en las notas ó protocolo del Escribano, en el caso presente puede dudarse del otorgamiento de dicho codicilo:

Considerando que á haberse otorgado el codicilo no era racionalmente posible que D. Joaquín Chiva y Sanaja hubiese loado y aprobado el vínculo en 1745, asegurando que su padre D. Pedro tuvo y poseyó los bienes vinculados por toda su vida:

Considerando que nada prueban contra la existencia de una vinculación las enajenaciones que alguno ó algunos de sus poseedores hubiesen hecho en el curso de las sucesiones:

Considerando que aun cuando D. Antonio Miguel Chiva hubiera efectivamente otorgado el codicilo en cuestión, de ninguna manera tendria este fuerza por sus circunstancias para revocar una vinculación fundada en testamento solemne, no siendo por otra parte en Aragon uniforme la doctrina, ni constante la costumbre que Moreno alega para sostener su recurso:

Considerando que en virtud de la amplia amnistia concedida por la clemencia de S. M. á los que militaron bajo las banderas de D. Carlos, y de las Reales órdenes que posteriormente recayeron en favor de Llorens devolviéndole sus bienes secuestrados y no confiscados, destinándole como Brigadier de los ejércitos nacionales, á las órdenes del Capitan general de Valencia, no puede conceptuarse en el caso de excepción que marcó el fundador del vínculo:

Considerando que la condenación hecha á un litigante para la restitución de frutos depende de la apreciación de los Tribunales acerca de la mala ó buena fe con que se hubiesen percibido:

Y considerando, finalmente, que las sentencias de primera instancia y de vista, ni fueron conformes, ni aun cuando lo hubieran sido, podria dar motivo á nulidad la circunstancia de no haber asistido á revista mayor número de Magistrados que á la vista, según lo tiene declarado este Supremo Tribunal:

Fallamos, que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de nulidad interpuesto por D. Nicolas Moreno, á quien condenamos en las costas y á la pérdida de los 10,000 rs. depositados, que se distribuirán con arreglo á derecho. Mandamos se saque copia certificada de la nota del Relator en el apuntamiento formado en este Tribunal Supremo, y que se remita á dicha Real Audiencia para lo que proceda con arreglo á derecho:

Así por la presente sentencia, que se publicará en la Gaceta de esta corte é insertará en la Colección legislativa, pasando al efecto las correspondientes copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Maria Fonseca.—Ramon Maria de Arriola.—Joaquin de Roncali.—Juan Maria Bie.—Felipe de Urbina.—Eduardo Elío.—José Maria de Trillo.

Publicacion.—Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Don

Ramon Maria de Arriola, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estando celebrando audiencia pública en su Sala segunda el día de hoy, de que certifico como Secretario de S. M. y Escribano de Cámara en dicho Supremo Tribunal.

Madrid 15 de diciembre de 1858.—Dionisio Antonio de Puga.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 7 de febrero de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

Ayuntamiento de Vereá.

Los individuos que componen dicho cuerpo municipal, con acuerdo de la junta repartidora, determinaron que arreglado como se halla en el orden el reparto de la contribución de consumos que ha de regir en el año corriente, se ponga de manifiesto en la puerta de este consistorio por término de seis dias perentorios, á contar desde el 2 del próximo febrero, dentro de los cuales los llamados á contribuir por este concepto podrán reconocer sus cuotas y presentar sus demandas en la Secretaría del indicado Ayuntamiento; con apercibimiento de que los que no lo verifiquen dentro de aquel, serán desatendidas sus reclamaciones y les pararán los perjuicios consiguientes.

Vereá enero 29 de 1859.—E. A. P., José Gonzalez.—Manuel E. Lindo.

Idem de Trasmiras.

Concluidos los repartos de territorial y consumos de esta Alcaldia del corriente año, estarán de manifiesto en la Casa consistorial del mismo desde el 1.º hasta el 8 del entrante febrero.

Lo que se anuncia al público para que los contribuyentes puedan reclamar de agravio durante dicho tiempo, pues pasado no serán oídos.

Trasmiras y enero 30 de 1859.—E. A. P., Pedro Perez Mascareñas.—P. S. M., Baltasar Conde, Srio.

Idem de Laza.

Ultimado el repartimiento de contribución territorial que ha de regir en este distrito en el presente año, queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de 8 dias para oír las reclamaciones que puedan aducirse á las notas respectivas.

Laza enero 31 de 1859.—José Blanco.—Damaso Alonso Canto, Srio.

Idem de Amoeiro.

Esta corporación y asoria los acordaron anunciar la subasta de la numeración de las casas de este distrito, así como la medición de las distancias entre la consistorial y los lugares, caseríos etc. que comprende, cuyo remate con arreglo al pliego de condiciones que estará de manifiesto en la Secretaría de la corporación, tendrá lugar el día 15 del corriente á las 12 de su mañana.

Amoeiro febrero 2 de 1859.—Narciso Araujo.

Idem del Pereiro de Aguiar.

Desde el 8 al 16 del corriente se procederá á la recandación de contribuciones del primer trimestre, esperando del celo de los Señores Alcaldes limitrofes, procurarán que sus respectivos domiciliarios se presenten á satisfacer las cuotas que les pertenezcan con puntualidad y sin dar lugar á vejaciones.

Pereiro febrero 2 de 1859.—Andrés Blanco, P. I.

IMPRESA DE D. CESAREO PAZ Y H.